

28 de julio de 2025



Incumplimientos del Acuerdo Final: un llamado urgente por la vida, la dignidad económica y la vivienda de los firmantes de paz



Violencia persistente y amenazas crecientes

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, la violencia contra quienes le apostaron a la reconciliación no ha cesado. A la fecha, han sido asesinados 462 firmantes de paz. En lo corrido de 2025, ya se registran 28 homicidios, muchos de ellos en regiones que deberían ser referentes de construcción de paz como el Cauca y Catatumbo.

En los territorios las y los firmantes enfrentan una grave situación de seguridad. La presencia de grupos armados ilegales amenaza la vida de quienes avanzan en procesos colectivos de reincorporación. Uno de los casos más recientes y dolorosos es el asesinato de Florilba Ramos y Ferney Elago Caviche, firmantes del Acuerdo y pertenecientes al pueblo indígena Nasa, quienes lideraban dos proyectos agroproductivos de la Cooperativa COOMEET en Caldono (Cauca).

Las amenazas sistemáticas, los desplazamientos forzados y las desapariciones aumentan en los territorios. Este patrón se replica en distintas regiones del país. La presencia y accionar de grupos armados ilegales está poniendo en riesgo la vida de quienes confiaron en el proceso de paz.

Economía y proyectos productivos

Si bien la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) habla de 6.003 proyectos productivos aprobados que benefician a más de 11.000 excombatientes, la mayoría de estas iniciativas carece de garantías reales de sostenibilidad. Apenas 19 proyectos han logrado un apoyo técnico y financiero consolidado, mientras que el resto subsiste en condiciones de precariedad, sin acompañamiento técnico continuo, ni acceso a mercados o a líneas de crédito efectivas.

En distintas regiones del país, la situación es crítica. Las condiciones de inseguridad y los obstáculos estructurales han obligado a reorientar recursos extraordinarios —como los cerca de 3.700 millones de pesos destinados a



Catatumbo—, que siguen siendo insuficientes ante la magnitud de la crisis. Las iniciativas colectivas se enfrentan además, a la falta de infraestructura y ausencia de articulación institucional, lo que impide un avance efectivo y sostenible.



Acceso a tierra y vivienda

El acceso a tierras y viviendas dignas sigue siendo uno de los principales compromisos pendientes del Estado con los firmantes de paz. La ARN ha gestionado la compra de tierras para 14 de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lo que representa cerca de 15.000 hectáreas y beneficia a aproximadamente 1.800 excombatientes. Sin embargo, las formas asociativas —escenarios colectivos donde los firmantes desarrollan sus proyectos de vida— aún carecen de una ruta clara y efectiva de acceso a tierras. Persisten serias dificultades en la formalización jurídica, la infraestructura, el acceso a servicios básicos y la seguridad en la tenencia.

En materia de vivienda, los avances son insuficientes: apenas 140 viviendas en Cauca y 43 en Caquetá han sido entregadas, y las construcciones en departamentos como Antioquia, Meta y Cesar avanzan con gran lentitud. En proyectos emblemáticos como el ETCR de Caño Indio, Catatumbo, las promesas siguen superando a los hechos.

Necesidad de avanzar en un enfoque diferencial

Una de las deudas persistentes en la implementación del Acuerdo de Paz es la necesidad de que las políticas de reincorporación adopten un enfoque verdaderamente territorial y diferencial. Esto implica atender las condiciones particulares de las distintas regiones del país (Centro, Sur, Oriente, Caribe y Noroccidente), y, al mismo tiempo, responder de manera efectiva a las necesidades de las mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, población LGBTIQ, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación, exclusión y violencia.

Exigimos cumplimiento y garantías reales

Exigimos al Gobierno Nacional, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio de Vivienda y la Alta Consejería para la Paz que cumplan sin dilaciones lo pactado en el Acuerdo Final.



Se requiere garantizar la vida y la seguridad de las y los firmantes mediante protocolos de protección efectivos; fortalecer la justicia para acabar con la impunidad; asegurar la sostenibilidad económica de los proyectos productivos; y acelerar el acceso a viviendas y tierras, con un enfoque diferencial para mujeres, población con discapacidad, LGBTIQ, comunidades indígenas y afrodescendientes.



La paz está en juego. No son tiempos de promesas, sino de acciones urgentes y concretas que protejan la vida y dignidad de quienes le apostaron al futuro del país.



Por todo lo anterior, la situación actual exige:

Una respuesta articulada, urgente y efectiva del Estado y de la comunidad internacional. Los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos forzados y las deudas en proyectos productivos y vivienda para los firmantes de paz son una muestra del grave incumplimiento de lo pactado y del riesgo que corre la construcción de paz en los territorios.

Ante esta crisis, **exigimos la conformación de una Mesa Interinstitucional de Alto Nivel**, que reúna a todas las entidades competentes:

(Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN- Ministerio de Agricultura, Sociedad de Activos Especiales –SAE-, Agencia Nacional de Tierras –ANT-, Agencia de Desarrollo Rural –ADR-, Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda, Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Unidad Nacional de Protección)

Organismos de control: (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación)

Garantes y representantes de la comunidad internacional: Instituto de Estudios Interculturales: (Universidad Javeriana), Plataforma de Organizaciones Comunitarias del Cauca, (Misión de Verificación de las Naciones Unidas, MAPP OEA)

Y delegados de las y los firmantes de Paz

Esta Mesa debe coordinar acciones concretas e inmediatas para salvaguardar la vida, garantizar derechos fundamentales y asegurar el cumplimiento integral del Acuerdo Final.



Firman:

- **Federación Nacional de Economías Solidarias – ECOMUN**
- **Cooperativa Multiactiva Ecomun Esperanza del Pueblo – COOMEPE –**
- **Federación de organizaciones Sociales y Solidarias del Suroccidente - FEDECOMUN-**
- **Federación Mesa Nacional del Café – FEMNCAFE**
- **Federación Caribeña De Procesos Organizativos Por La Paz - FEDECARIBE OES-**
- **Federación de Economías Sociales del Oriente -ECORIENTE**
- **Federación Nacional de Ganadería de Ecomun – ECOGAN-**
- **Federación de Economías Sociales del Centro del País –FEDECENTRO- Región Sur y Noroccidente – Ecomun.**

